

Jaime Caycedo\*

## PROCESOS EMANCIPATORIOS EN CONDICIONES COMPLEJAS: LA LUCHA POR LA UNIDAD POPULAR EN COLOMBIA

LA FORMACIÓN DE UNA CONCIENCIA acerca de la unidad del pueblo frente a sus opresores, por encima de los prejuicios y las trampas que la sociedad burguesa interpone para mantener la división entre los oprimidos, atraviesa laberintos intrincados y accede a mesetas imprevistas según las condiciones básicas de partida, el desenvolvimiento “natural” de la lucha de clases y la concepción estratégica que ponen en juego los sujetos sociopolíticos y culturales.

Los saberes de la emancipación en condiciones complejas resultan ser, necesariamente, complejos. Ante todo, porque la razón de la complejidad está en la estructura misma de la totalidad social. Dicho de otra forma, también es complejo para los dominadores ejercer su dominación. Sólo pueden “simplificar” sus procedimientos con dosis acrecentadas de violencia, represión y/o perfidia ideológica mediática para desnaturalizar y enmascarar –con trajes y máscaras prefabricados a la medida– los argumentos y la razón de quienes luchan por la emancipación<sup>1</sup>.

\* PhD, Antropólogo. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Secretario General del Partido Comunista Colombiano.

<sup>1</sup> A propósito del papel del sufrimiento y la resistencia a la injusticia y el terror, ver la obra clásica de Barrington Moore (1989) y, más referido al caso colombiano, el libro de Michael Taussig (1994).

La acción de los dominadores y del Estado en torno a la llamada “amenaza terrorista”, esto es, la guerra preventiva antiterrorista como política permanente de la actual globalización, asume para América Latina, desde el imperialismo, las características de una recolonización, con todos los ingredientes atribuibles a este concepto. Esta acumulación de ventajas unilaterales a la dominación transnacionalizada del gran capital incluye componentes geopolíticos evidentes y, además, formas de intervencionismo político-militar –no menos graves por presentarse camufladas– junto con una avalancha de recursos de agresión mediática. Esta verdadera “guerra colonial”, de la globalización y desde ella, impone al conocimiento científico y a la intuición de los dominados dos requisitos: el de concebir su proyecto contrahegemónico con el enfoque de un cambio transformador radical y completo de las actuales condiciones de existencia; y el de trabajar por reunir, en un haz de voluntades, las fuerzas de la resistencia y los factores del cambio político transformador como vía de emancipación. Un elemento que corre en ayuda de este proyecto es la experiencia, propia y compartida, en el campo de los rasgos culturales comunes a las sociedades latinoamericanas y a la extraordinaria creatividad combativa de sus pueblos.

La experiencia de Colombia puede ilustrar la complejidad, de y en la que empiezan a formarse estas experiencias. Confrontado con la maniobra de una reelección presidencial, impuesta como una especie de “golpe de Estado” desde el poder, el pueblo colombiano pone en demostración los acervos disponibles para resistir y avanzar en la transformación estratégica de sus condiciones de lucha.

Afirmamos que la formación de una conciencia de la emancipación como conciencia revolucionaria en Colombia se ha desenvuelto históricamente en confrontación con formas de modernización de esencia conservadurista y autocrática, guiadas desde el Estado de clase y sus aparatos ideológicos, que han mostrado la tendencia a excluir del campo de las manifestaciones ideopolíticas toleradas las creaciones provenientes de la experiencia popular propia y del sincretismo de esta con las experiencias latinoamericanas, revolucionarias y progresistas. La creación de una superestructura virtual, soportada en el autoritarismo militarista y mediático que impregna todas las instancias del Estado y se vierte sobre la sociedad civil, encubre apenas la alianza histórica de la vieja oligarquía decimonónica y el imperialismo estadounidense con su proyección geopolítica de control continental. Los principales factores, y a la vez soportes de la conciencia de la emancipación, son los sujetos antisistémicos de la formación sociohistórica colombiana, cuya práctica política ha creado las bases de los saberes para avanzar en el actuar transformador. Estos sujetos antisistémicos, que se manifiestan en todas las variadas expresiones del movimiento popular colombiano,

desde la lucha de masas por las libertades y derechos fundamentales hasta la lucha armada revolucionaria, han contribuido –quien más, quien menos, en distintos momentos– a la formación de una pedagogía y una experiencia de la unidad que ha permitido abrir horizontes y perspectivas ciertas a la lucha por la emancipación.

En esta primera aproximación al tema examinaremos las condiciones impuestas por el poder dominante dirigidas a forzar el predominio de un pensamiento único desde el Estado y el sistema mediático. En un segundo momento intentaremos sintetizar la historia de las experiencias conducentes a la unidad popular como condición y vía de las prácticas emancipatorias en el caso colombiano.

### RÉGIMEN POLÍTICO Y LUCHA POR LA EMANCIPACIÓN

El régimen político colombiano ha variado poco en el último largo medio siglo. En su formación histórica cumplió un papel demarcado el viraje reaccionario del imperialismo hacia la *guerra fría* y su secuela de militarización, *macartismo*, destrucción de los derechos y libertades de los trabajadores y los ciudadanos, e impulso de diferentes variantes de la *guerra preventiva*, entendida como un factor de contención de la rebeldía popular, que había estallado como presencia trascendental, aunque caótica, de la multitud, en la protesta por el magnicidio del 9 de abril de 1948 y en el auge significativo de la resistencia armada campesina.

El estallido político y social, acallado mediante la represión violenta y las masacres de Estado, en los días y semanas que siguieron, a pesar de no haber encontrado, en su momento, el cauce de una dirección política eficaz y revolucionaria, no impactó menos en la sociedad en su conjunto, ni dejó de convertirse en un referente histórico obligado de la vida nacional. Particularmente, no dejó de constituir un punto muy alto de la confrontación de clase, entendida en el sentido más amplio, como enfrentamiento entre, por un lado, el sentimiento popular por ampliar el espacio de las libertades, rechazar su cercenamiento sostenido y encontrar un campo de participación en la búsqueda de vías para la justicia social –destruida en la figura sacrificada del *líder* y en la política de *sangre y fuego* que luego habrá de consagrarse como esencia de los gobiernos conservadores de aquel período (1946-1953)– y, por otro, la violencia de Estado, la represión generalizada antipopular y el enfrentamiento interpartidista liberal-conservador, relanzado como instrumento de la derechización del poder, en el ambiente de servilismo hacia la política anticomunista y antisoviética de Estados Unidos.

El golpe militar de 1953 (que se mantuvo en el poder hasta 1957) aparentó separarse de esa línea, pero pronto mostró su seguidismo.

El Frente Nacional (1958-1974) y los gobiernos posteriores a su terminación (1974-1991) prosiguieron la tensa y pertinaz batalla por

*derechizar el Estado y el régimen político*, en contravía del interés de crecientes fuerzas sociales y corrientes populares de la sociedad<sup>2</sup>. Se reafirma la tendencia secular de la gran burguesía, dependiente del imperio y de los grupos financieros colombianos, a una *modernización autoritaria*, en permanente asíntota con los modelos emparentados con el fascismo, en especial por su recurso a la violencia de Estado –abierta o encubierta, según las circunstancias– y su “domesticación” bajo los recetarios del Conflicto de Baja Intensidad (CBI), como forma de la guerra preventiva. La dictadura encubierta, pertrechada de todos los pretextos legales para aparentar una legitimidad mientras los seres humanos, titulares de los derechos que les otorga una supuesta ciudadanía, son muertos, torturados, desaparecidos, refugiados interna y externamente, frente a una mirada entre tímida, cómplice o simplemente hipócrita de la llamada comunidad internacional, es indicativa de las formas de democracia restringida que el imperialismo valida. Este modelo de régimen político de falsa democracia constituye, en cierto modo, una “creación original” perversa de la gran burguesía colombiana.

La reforma constitucional de 1991 fue un ensayo de reglamentar los medios represivos sin desmontar el tutelaje militarista sobre la sociedad y el Estado. El esfuerzo por instituir nuevas libertades y derechos (derecho de amparo, algunas modalidades de acciones afirmativas, consultas populares, revocatoria del mandato de algunos elegidos, elección popular de alcaldes y gobernadores, etc.) no modificó el esquema de la tradición dominante en el ejercicio del poder. La vieja práctica del *estado de sitio permanente* fue sustituida por el intento de hacer regir el *estado de excepción* hasta sus límites extremos y, ante el fracaso de estas medidas, intentar introducir leyes antiterroristas, el modelo estadounidense de *justicia acusatoria*, la extradición de nacionales a EE.UU., la judicialización de la protesta social, la eliminación del delito político, su tránsito a “sedición” para otorgarle estatus político a los terroristas paramilitares. El esquema que orienta las prácticas de la dominación de clase permanece y se convierte en una herramienta perversa de nuevas funciones que termina autoasignándose el poder. Así, por ejemplo, el modelo neoliberal se impuso desde adentro del Estado, como un asalto grotesco para desvertebrar lo público, sin consideración ninguna por las consecuencias que acarrearán las privatizaciones como otra forma de desnacionalización del Estado y fragilización de su autodeterminación política y económica.

---

2 Para una visión inteligente y no susceptible de ser tildada de izquierdista, ver Vásquez Carrizosa (1979), en especial los capítulos 14 y 15. Desde otro ángulo, el de la creación de una oposición “populista” al Frente Nacional y la formación de la ANAPO (partido creado por el ex dictador Rojas Pinilla), ver Ayala Diago (1996).

Como resultado, los pocos o muchos avances democráticos de la Constitución de 1991 se han ido reversando; han dado paso a formas que desnaturalizan y restringen los derechos, y condicionan las libertades. Lo que no se logra contrarreformar, se desconoce *de facto*, mientras el poder consigue las mayorías parlamentarias sumisas que le permiten crear nuevas figuras constitucionales. Es el caso de la reelección presidencial inmediata del presidente en ejercicio que contó, a fines de 2005, con la aprobación de una Corte Constitucional alineada mayoritariamente con el Poder Ejecutivo.

Tal estado de cosas sólo puede ser transformado con la intervención popular y el cambio político democrático. El viraje que Álvaro Uribe intenta introducir en el régimen político colombiano mira al pasado. Si el capitalismo colombiano se afianzó a mediados del siglo XX –con sus características propias de *dependencia estructural y geopolítica frente al imperialismo*– en medio del desangre nacional de la violencia y la anti-democracia, Uribe intenta repetir esta historia justo cuando resuenan nuevos clarines de autodeterminación, antiimperialismo y lucha de los pueblos, y el imperio muestra sus debilidades, de cara a América Latina.

La comedia actual no es que el régimen político colombiano logre arrastrar mayorías ciegas, insensibles o “embrujuadas”. Lo nuevo de la realidad son dos aspectos indisolubles: por un lado, si en el pasado los enviones autoritarios encendían las hogueras de la guerras civiles (Guerra de los Mil Días, 1899-1902) o las resistencias campesinas armadas en la segunda mitad del siglo XX, ahora el viraje a la ultraderecha se intenta en medio de la guerra, esto es, lejos de la conciliación o la solución política y mucho más en el contexto de la solución militar. Uribe porfía, como quien intenta colocar un pararrayos en medio de una tormenta. Piensa que el amo imperial sostendrá indefinidamente sus propósitos. Y, sobre todo, sobrestima el alcance de su paternalismo demagógico y militarista –sin resultados para las mayorías populares– como soporte de su proyecto. Por otro lado, hace parte de lo nuevo el aprendizaje que muchos sectores están realizando de las experiencias modeladas por las luchas populares en la historia nacional. Especialmente, el aprendizaje y las expectativas renovadoras que la unidad despierta en amplios espacios populares. Expectativas alimentadas por el entorno latinoamericano, sobre todo en cuanto envuelven opciones reales de cambio que, en todo caso, en mucho se asocian a las posibilidades reales de acceso popular (y plebeyo) al poder político. La dupla de Próspero y Ariel está rota. Calibán asume las riendas del Estado en varios países del continente.

## **EXPERIENCIAS Y FORMACIÓN DE SABERES**

¿Cuáles son las enseñanzas que las experiencias traducen como favorables a la emancipación, en el caso colombiano?

La modernización conservadurista y autocrática apuntó siempre a destruir las tradiciones revolucionario-democráticas que construyeron la conciencia y los mitos de la nación y el Estado republicano: la de la rebelión Comunera, de 1781; la de la guerra revolucionaria anticolonialista (1816-1824); la de las rebeliones contra la esclavitud y el “perrero”, en el sudoccidente, como parte de las rebeliones de mediados del siglo XX y la guerra artesana, de Bogotá (1854); el contenido agrarista, nacionalista y democrático que afloró en episodios cruciales de la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá; la emergencia del movimiento obrero y sus luchas en el siglo XX; las resistencias armadas campesinas contra la violencia (1948-1962); la lucha armada revolucionaria contemporánea desde 1962 hasta el presente.

También se orientó a demoler el edificio republicanista, civilista y laico, heredado de la guerra revolucionaria anticolonialista bolivariana para reemplazarlo por una visión idealista de la construcción social y la legitimidad con base en la normatividad jurídica, en una sociedad dominada por latifundistas-comerciantes, que hicieron del mantenimiento de relaciones semiserviles de la fuerza de trabajo y del ejercicio prepotente del poder político fuentes suplementarias de acumulación. Cuando se instituye el proceso de la llamada Regeneración, con la Constitución de 1886 que rigió por más de un siglo, la protoburguesía de hacendados comerciantes descubre, en la centralización del poder del Estado y el sometimiento regional, una herramienta más eficaz para la acumulación originaria y las negociaciones beneficiosas a sus intereses estrechos, en el complejo sistema mundial interestatal, de dominio estadounidense, que avasallaba en el vecindario, con los ojos puestos en la división de Colombia y el control geopolítico del istmo panameño.

El cosmopolitismo de la globalización contemporánea, cuyo centro es la exégesis del modo de vida estadounidense con su montaje mediático, ha venido a reemplazar, en el proyecto ideológico dominante, la *influencia transnacional* que cubrió la iglesia católica, particularmente con la instauración del Concordato entre Colombia y el Vaticano, vigente hasta la década del setenta. Esta influencia, especialmente en el aparato educativo y en las denominadas *misiones*, que influyeron en la aculturación forzada de las sociedades indígenas y afrocolombianas, trasladó a importantes sectores sociales policlasistas, regionales y etnosociales el decadente pensamiento conservadurista religioso europeo de fines del siglo XIX, intransigente y sectario, pero a la vez paternalista y propiciador del “buen obrero”.

El pensamiento ultraliberal dominante ensalza una visión unilateral del progreso, en la lógica del desarrollo económico en tanto consolidación de relaciones de explotación del trabajo al menor costo. Ve en la sociedad de consumo el modelo de vida buena a perseguir. Sin duda

representa un elemento paradigmático de la conciencia social. Según su lógica, el destino de cada quien está predeterminado entre ganadores y perdedores, el éxito a cualquier costo es bendecido por el aprecio social y el logro de dinero en abundancia borra cualquier pecado o culpa, aunque no asegura la vida, a veces efímera, de los afortunados. El manejo del Estado y la política están reservados para las clases superiores y, en teoría, se trata de un asunto que deba preocupar a cada uno. Esta percepción del poder y su manejo excluyente tienen un amplio espectro de receptividad en sectores populares. La credulidad de los pobres admite una amplia tolerancia mientras el Estado no entre a perjudicar los niveles de sobrevivencia de la gente. Las nociones de derechos sociales, reclamación, reivindicación o sindicalización son juzgadas como “innecesarias”, en tanto que, como políticas “informales” del poder, son señaladas como subversivas o, en todo caso, sospechosas.

En este contexto, el ámbito de lo alternativo, lo crítico, lo revolucionario tiende a ser visto como algo extraño o bizarro. La experiencia del exterminio físico de dirigentes de la Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista (PCC), del sindicalismo y, en general, de la oposición de izquierda se advierte como algo poco menos que “natural” en la lógica del sistema. La reprobación a los crímenes y el rechazo a la pretensión de liquidar las ideas por esa vía se expresan de muchas maneras, incluidas manifestaciones psicosociales de carácter patológico. Pero ello no impide que sentimientos de pánico o terror, socialmente interiorizados, obren como frenos al quehacer libre y al libre derecho a opinar y actuar. El efecto ideológico del terrorismo cotidiano, repetido, amparado por la impunidad y por la autoridad del Estado, cumple su cometido.

La idea de que los oprimidos se unan por sus intereses y sus derechos sociales, culturales, de género y políticos es una constante de la modernidad occidental. Influyó en las formas de la unidad nacional contra el colonialismo desde fines del siglo XVIII y estuvo, desde entonces, en las raíces del Estado nación como una herramienta de la expansión de la formación social capitalista a nivel global. Los procesos de liberación nacional y sus formas de unidad ganaron nuevos contenidos de clase bajo el efecto de las revoluciones obreras del siglo XX. Las fuerzas sociales esenciales de la revolución democrática, de aquello que Lenin denominó la época del imperialismo, ocuparon un lugar central en el desarrollo de los movimientos de liberación en los espacios del Tercer Mundo. Los campesinos y trabajadores rurales, los desempleados y sectores pobres urbanos, las capas medias populares y crecientes corrientes de la intelectualidad cumplieron un papel destacado en procesos transformadores e hicieron parte de frentes amplios de convergencia que asumieron el poder en sus países desde la segunda mitad del siglo XX.

La agregación de fuerzas que deshace dispersiones y crea instrumentos para soldar coincidencias, solidaridades, identificar objetivos comunes, vencer diferencias o convivir con ellas con base en destacar aquello que unifica no es, sin embargo, una técnica simple. Es parte del *arte de la política*, que así ha sido definida desde Maquiavelo a Lenin. Hace parte de la formación de nuevos sujetos, en dependencia de las tareas históricas planteadas a los pueblos, cuya realización y desenlace eficaz están en relación directa con la fortaleza cuantitativa y cualitativa del proceso unitario, con su decisión y clarividencia al asumir los retos a los que aspira responder y con el acierto de los pasos prácticos que emprende para su desempeño táctico.

A mediados de los ochenta, numerosos debates apuntaron a la discusión acerca de la unidad estratégica revolucionaria y destacaron la importancia de la categoría de *vanguardia*, asumida desde sus determinaciones políticas. Los debates de entonces alimentaron opciones de alcance significativo, como en los casos centroamericanos: Nicaragua, El Salvador y, en otra medida, Guatemala. Resultaba claro, sin embargo, que no todos los procesos tomaban como punto de partida las premisas de la situación centroamericana, largamente asediada por las ambiciones estratégicas de EE.UU. La tesis de la *vanguardia colectiva* desplegó su alcance, y su enseñanza fructificó en determinadas condiciones. No todas las experiencias tuvieron resultados comparables. El balance de las experiencias centroamericanas está aún por hacerse para extraer sus verdaderos alcances. Los cambios negativos en el escenario mundial tras la desaparición de la URSS permiten explicar en parte el curso de procesos truncos o inconclusos. Pero no pueden dar cuenta de la vida interior de los mismos, en particular de la consunción de las condiciones subjetivas surgidas de las décadas del setenta y ochenta, y los límites objetivos que debieron afrontar en cada desarrollo nacional.

La crisis del socialismo revocó los puntos de arriba de estas discusiones y colocó en un nuevo terreno la relación de fuerzas. Las circunstancias de entonces conllevaron repliegues y divisiones, una nueva diáspora de la que sacaron ventaja el posibilismo, el oportunismo y, en general, las posiciones de conciliación con los regímenes de clase en su nueva postura neoliberal.

En Colombia, los acercamientos entre los movimientos guerrilleros que conformaron la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, a inicios de los noventa, no tuvieron nuevos desarrollos. Las fuerzas principales (las FARC y el ELN) mantienen un contacto ocasional que no ha conseguido avanzar en una perspectiva de largo alcance. Perviven puntos de confrontación críticos. Pero han buscado experiencias de cooperación en varias regiones.



La desmovilización de algunos sectores del movimiento armado, a comienzos de los años noventa, alimentó la formación de una *franja intermedia de corrientes políticas* que, en la alternativa entre reafirmarse en la izquierda y conciliar, terminó aceptando las condiciones especiales de una reinserción en el seno del establecimiento. Un mérito de dicha franja ha sido su tendencia al alejamiento del bipartidismo con el que mantiene una actitud crítica, aunque coquetea con algunas de las propuestas reformistas, de inspiración neoinstitucionalista socialdemócrata. El deslizamiento de dirigentes de la izquierda hacia la franja intermedia no cerró totalmente las puertas a las coincidencias. Como una respuesta a este fenómeno socio ideológico, en otros espacios de la lucha popular se reafirmó el papel y la responsabilidad de las fuerzas más decididas y comprometidas de la izquierda en el empeño de la unidad, como la probabilidad de establecer un programa común y unas formas de acción y organización compatibles con los espacios de la lucha de masas, en acercamiento y unidad de acción con los movimientos sociales, particularmente desde las iniciativas de lucha común del movimiento obrero.

La lucha frente al terrorismo de Estado característico del régimen político trajo para la izquierda colombiana el aprendizaje del significado de los derechos humanos como medio de la resistencia popular y la ampliación de las movilizaciones por las libertades públicas, continuamente puestas en entredicho por el poder. Un importante movimiento por la defensa de los derechos humanos se extendió desde 1980, y ha adquirido cobertura y credibilidad en el país. El ataque a las libertades ha tomado el ropaje de la acción antiterrorista y antisubversiva desde mucho antes del 11 de septiembre de 2001. El régimen político colombiano se ha caracterizado por considerar las libertades y garantías democráticas como un marco excesivamente tolerante donde prosperan, en ausencia de una mano fuerte y de medidas legales consecuentes, los saboteadores del orden.

El estado de sitio permanente fue una constante durante los últimos cincuenta años del siglo XX. Las clases dominantes colombianas no se atreven a romper el pacto republicano que exige la vigencia de los derechos fundamentales. Pero los reglamentan y los circunscriben de condicionalidades hasta modificar su alcance y contenidos. Tanto el viejo estado de sitio como el intento de Álvaro Uribe de implantar un estatuto antiterrorista, declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, tienen la misma inspiración: recortar hasta negar las libertades, acudiendo al gran pretexto antisubversivo.

El Estado contrainsurgente construyó, con la asesoría estado-unidense, el montaje básico del paramilitarismo. Las violaciones de los derechos humanos, que hasta fines de los ochenta eran imputables

a la fuerza pública, han ido siendo atribuidas al paramilitarismo o a autores desconocidos. El proceso de legitimación y negociación con los paramilitares, emprendido por el gobierno Uribe en Santa Fe de Ralito, departamento de Córdoba, desde 2002, ha puesto de relieve las medidas de impunidad, testaferrato y expropiación a favor de criminales de lesa humanidad, algunos de los cuales han empezado a recobrar la libertad cuando entró en vigencia, en diciembre de 2005, el decreto reglamentario de la llamada de Ley de Justicia y Paz. En respuesta, ha surgido un movimiento de víctimas sobrevivientes del terrorismo de Estado, que asumió la lucha común con las agrupaciones preexistentes de desaparecidos, presos políticos y refugiados internos, denominados desplazados, que representan una de las mayores cifras a nivel mundial. Este movimiento levanta la bandera del reconocimiento, la memoria, el establecimiento de la verdad, la reparación y la justicia.

En este mismo marco –que tiene que ver con las libertades, los derechos humanos, la organización de las víctimas sobrevivientes y los desplazados– se ha mantenido y consolidado un *movimiento por la paz, la solución política negociada del conflicto y los acuerdos humanitarios*. La importancia de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz está en los encuentros realizados, pero también en sostener una red de relaciones sociopolíticas y culturales muy amplias y constantes. Y en el respaldo que aporta a los acercamientos dirigidos a relanzar los contactos para el diálogo.

A su vez, un conjunto de corrientes apoyan la idea de acuerdos humanitarios inmediatos, que alivien las duras consecuencias del conflicto armado y permitan el intercambio humanitario de rehenes y presos políticos. Varios países europeos, entre los que se encuentran Francia y Suiza, insisten en apoyar este propósito, que cuenta con creciente simpatía en la opinión internacional.

En resumen, lo que deseamos mostrar es que una cultura política democrática se ha ido configurando con la acumulación de experiencias de resistencia, lucha social, movilizaciones de masas, gestiones parlamentarias, debates jurídicos, etc., que han puesto en acción movimientos que se agregan a la lucha por la democracia y por los derechos de los trabajadores y todos los sectores segregados, perseguidos o discriminados. ¿Cómo poner en convergencia la diversidad de objetivos democráticos, de reivindicaciones justas, de experiencias con las nuevas expresiones de la inconformidad que se están formando? Nuevas experiencias han surgido que debemos examinar.

### **LAS EXPERIENCIAS MÁS RECIENTES**

El 25 de octubre de 2003 el proyecto de referendo sometido al voto fue derrotado por no alcanzar el piso que la Constitución establece para ese

tipo de consultas. Eso no fue todo. Al día siguiente, en las elecciones locales, candidatos independientes apoyados por la izquierda ganaron la alcaldía de Bogotá y la gobernación del departamento del Valle del Cauca. Los resultados electorales, en general, fueron adversos a Uribe. ¿Cómo se explica esta circunstancia en el caso de un presidente que las encuestas mantienen en la cumbre de las preferencias y que puso todo el aparato del gobierno para defender su referendo? Desde la segunda mitad de 2002, el Frente Social y Político lideró una propuesta de resistencia a dicho proyecto. A comienzos de 2003, el Comando Nacional Unitario de las centrales obreras CUT, CTC, CGT y la Confederación Nacional de Pensionados asumieron el impulso a lo que desde entonces se ha llamado la Gran Coalición Democrática (GCD).

El intenso debate social tuvo efectos evidentes en el resultado del referendo. Pero el asunto no termina aquí. La GCD ha estimulado la movilización popular contra el tratado de libre comercio con EE.UU. (TLC) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y apoyado las movilizaciones indígenas de septiembre de 2004. Ese mismo año, respaldó la huelga nacional petrolera contra la privatización de ECOPEPETROL. Ha adelantado un esfuerzo por la realización de cumbres políticas de convergencia, reunido sectores de la oposición y saludado la unidad de la izquierda.

Lo importante que se advierte en estos pasos es la tendencia en las movilizaciones de masas a ganar protagonismo y a divulgar objetivos en contra del proyecto de Álvaro Uribe y su reelección. Sin tener la combatividad de los fenómenos ecuatoriano o boliviano, la tendencia evoluciona hacia una mayor politización, una mayor conciencia en las protestas y en la perspectiva de incidir en los procesos que ponen en juego el dominio del poder, las elecciones parlamentarias y presidenciales, y la elevación continua del despliegue popular.

El estilo de gobierno de la derecha, incluyendo sus recursos armados ilegales, no admite ninguna forma de concertación o acuerdo. En el nivel actual, la conciencia popular comienza a comprender que, sin un cambio político que rompa la actual orientación del poder, ninguna conquista es posible o perdurable. Pero a la vez empieza a ver, en la vitrina latinoamericana, que ese cambio político es posible y que puede comenzar por conquistar un gobierno democrático que se identifique con el interés popular.

Aquello que en otros tiempos se manifestaba como excepcional comienza a generar una nueva regla. ¿Por qué no experimentarla?

## **LOS ANTECEDENTES DE LA UNIDAD**

La izquierda colombiana tiene ya una larga historia en los intentos por avanzar en unidad de acción política. No siempre su accionar ha

asumido lo que sus críticos exponen como su estereotipo prefabricado: un conjunto de grupillos que se pelean entre sí, alejados del sentir y de la lucha del pueblo. No es correcto seguir sosteniendo esta manera de mirar una historia mucho más rica<sup>3</sup>.

Podemos intentar organizar los principales esfuerzos y sus respectivas características, que permiten observar sus tendencias evolutivas.

Existió un primer esquema, que obedece más que nada a una experiencia de adhesión a un gobierno reformista, en el período en que en Europa se forman los frentes populares antifascistas. El joven Partido Comunista que asume esa iniciativa experimentará, al despuntar la segunda posguerra, la influencia del enfoque browderista en su dirección<sup>4</sup>. Sin embargo, más allá de esta sola circunstancia, diversos sectores de izquierda continuaron mirando al Partido Liberal como un partido afín, con el que seguirían siendo aconsejables todo tipo de acuerdos. No toman en cuenta las realidades que cambiaron en los últimos sesenta años.

Tras una nueva alianza con la izquierda liberal, en este caso el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), dirigido por Alfonso López Michelsen, en 1962, en los albores del Frente Nacional, y luego de la reincorporación de este al Partido Liberal, sobreviene la primera experiencia en que actúa la *izquierda como núcleo de unidad democrática independiente del bipartidismo*. Se trata de la Unión Nacional de Oposición (UNO), cuya formación se inició a mediados de 1972<sup>5</sup> y tuvo

---

3 Ver, por ejemplo, López de la Roche (1994). Como otros intelectuales, López de la Roche pretende atribuir a la lucha armada y a la combinación de las formas de lucha el carácter de un freno al desarrollo de una izquierda de inspiración moderada pero masiva. Toma por causa lo que, en realidad, es el efecto de una estructura sociopolítica caracterizada, sostenidamente, por formas violentas de dominación. Ver asimismo Pizarro (1989).

4 “El browderismo es el conjunto de postulados políticos sostenidos por Earl Browder, elegido en 1930 secretario del Partido Comunista de los Estados Unidos y en 1935 designado como miembro del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista. Aparte del CPUSA, los partidos más afectados por esta desviación resultaron ser el de Cuba y el de Colombia [...] Los postulados de Browder están directamente relacionados con la Segunda Guerra Mundial [...] Donde en forma más orgánica se encuentran expuestas las concepciones de Browder es en su libro: *Teherán, Nuestra senda en la guerra y en la paz*, publicado en abril de 1944 [...] Perdiendo el enfoque de clase, Browder consideraba que en aras de la unidad nacional los comunistas no debían plantear la cuestión del socialismo en forma que comprometiera tal unidad, no debían oponerse a la ‘libre empresa’ ya que la situación de la alianza antifascista llevaría a los capitalistas norteamericanos a frenar sus tendencias a la rapiña. Afirmaba igualmente que una actitud de indiferenciada hostilidad hacia el gran capital resultaría fatal para el cumplimiento de los acuerdos de Teherán. Algunas de estas tesis habían sido ya expuestas por Browder en su libro *Victoria y posguerra*, publicado en septiembre de 1942” (Medina, 1980).

5 En su Convención Nacional del 22 y 23 de septiembre de 1973, la UNO acordó un programa de nueve puntos y aprobó la candidatura de unidad a la presidencia en el nombre

una destacada presencia política con la candidatura presidencial de Hernando Echeverri Mejía en las elecciones del 21 de abril de 1974. La UNO reunió, en sus mejores momentos, al Partido Comunista, un sector liberal vinculado a la Alianza Nacional Popular (ANAPO), el Movimiento Amplio Colombiano (MAC) y el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR). En un momento de ascenso popular, el proceso unitario tuvo una proyección sociopolítica en el paro cívico del 14 de septiembre de 1977, como la había tenido en la solidaridad tras el golpe fascista en Chile, en 1973. A comienzos de los ochenta, renació la experiencia unitaria con el Frente Democrático y la candidatura presidencial del destacado intelectual Gerardo Molina, apoyada por el movimiento Firmes. Con sus luces y sombras, estas experiencias enseñaron mucho en la vía de la propuesta de unidad desde una postura propia, que se acerca a la lucha social, la impulsa, estimula y dirige. Se trata de un período de intensas movilizaciones sociales, paros cívicos, marchas agrarias y movimientos estudiantiles.

Una experiencia ulterior, la de la Unión Patriótica, se forma en el contexto de un diálogo de paz entre el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y las FARC. Con la tregua acordada entre las partes y el desarrollo de lo que se llamó el “diálogo nacional”, se crea, a iniciativa de las FARC, el movimiento político que toma la forma de un acuerdo de fuerzas en el que participan, además del PCC, varios grupos, movimientos y personalidades nacionales y regionales. En su congreso constitutivo de noviembre de 1985, la UP proclamó su programa y su orientación de actuar en la lucha sociopolítica y electoral. Su resultado, en 1986, fue muy estimulante, con la elección de cinco senadores, nueve representantes a la Cámara, catorce diputados departamentales y 351 concejales municipales. En la primera elección popular de alcaldes logró 23 de estos funcionarios. La presencia de este movimiento en varias regiones agrarias despertó la alarma en el gamonalismo bipartidista. Con el pretexto de un supuesto “proselitismo armado”, el militarismo y la ultraderecha desataron operaciones de exterminio físico. Estas maniobras políticas, dirigidas a desprestigiar la lucha de la UP, desarticular su incidencia en la organización popular y golpear el despertar de las regiones donde hicieron irrupción tendencias que se independizaban del bipartidismo, lograron detener el auge popular y revertir la apertura

---

de Hernando Echeverri Mejía. El programa proclama la lucha contra el neocolonialismo y la dominación ejercida por EE.UU.; la reforma agraria democrática, con base en “la confiscación de la propiedad terrateniente”; la plena vigencia de las libertades y garantías democráticas; el apoyo a las luchas de los trabajadores, los maestros y estudiantes por la reforma de la educación; un Estado democrático y relaciones en pie de igualdad con todos los gobiernos del mundo. Ver UNO (1973) y el Informe del Comité Ejecutivo al pleno del Comité Central del PCC, diciembre de 1973 (Vásquez, 1973).

política desde la insurgencia y la izquierda, en la vía de abrir espacio a un proceso democrático que hiciese posible la paz, mediante el diálogo, la negociación y la incorporación paulatina de cuadros políticos de la guerrilla a la vida civil.

Pese a las inmensas y permanentes movilizaciones de masas, sobre todo campesinas y de los derechos humanos, la UP no logró reunir el volumen de alianzas ni la fuerza suficiente para consolidar el proceso iniciado. Los cambios institucionales alcanzados –a saber: elección popular de alcaldes, consultas populares y descentralización– no tocaban el poder institucional en el nivel nacional ni los recursos hábilmente preservados del régimen político bipartidista –a saber: el militarismo y las nuevas prácticas contrainsurgentes en vía de escenificación, tales como el narcoparamilitarismo, instrumentado como un brazo eficaz de la represión estratégica contra los factores populares antisistémicos puestos en marcha por la UP y el proceso de diálogo entre las FARC y el Estado. Desatada la *contrarrevolución preventiva*, no fue posible contener la matanza, auspiciada desde el Estado. A mediados de los noventa, habían sido asesinados siete parlamentarios, trece diputados departamentales, once alcaldes, 69 concejales y alrededor de 3 mil activistas y miembros de base. Esta terrible situación marcó la conciencia popular y mostró la necesidad de transformar el modelo de un régimen político que cierra las vías de su apertura y democratización.

La reincorporación a la vida civil de varios sectores del movimiento armado, liderados por el Movimiento 19 de abril (M19), llevó a un significativo protagonismo a sus principales dirigentes sobrevivientes. Un rasgo de su conducta fue, desde entonces, su alejamiento de la izquierda y su tendencia a acomodarse en los espacios que concedió el régimen bajo el gobierno de César Gaviria (1990-1994), especialmente la Asamblea Nacional Constituyente (1991). Los antiguos dirigentes impulsan a agruparse en el movimiento que se llamó Alianza Democrática M19 como una unión de la centroizquierda, como “alternativa” a la derecha y la izquierda, en clara alusión a excluir a la izquierda radical. Como ya se anotó, la actitud de esta corriente fue la de persistir en esta posición, hasta su acercamiento, en 2002, al Frente Social y Político (FSP) y a la candidatura de Luis Eduardo Garzón a la presidencia, ese mismo año. Los dirigentes de la franja intermedia, elegidos congresistas, conformaron el Polo Democrático Independiente (PDI), en 2003, en una maniobra de ruptura con la izquierda.

Una experiencia como la anterior no deja como enseñanza cosa distinta a la de un juego, dañino y peligroso, en las condiciones de la ofensiva de la ultraderecha y el paramilitarismo. El nuevo milenio puso en marcha la iniciativa del FSP como un reagrupamiento que partía desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y de la intención del

movimiento obrero sindical de cumplir un papel estimulador de la unidad política popular. Con diferentes resultados, se ha echado a andar un concepto que *concreta la unidad de la izquierda como núcleo de un proyecto de unidad mayor*, en la perspectiva de lo que hemos llamado una unidad de unidades, con un acercamiento programático de resistencia y ruptura de masas con el modelo de la globalización transnacional, el narcoparamilitarismo y el Plan Colombia-Plan Patriota, que se escudan en la llamada seguridad “democrática”.

El acuerdo AD-PDI, suscripto el 6 de diciembre de 2005, y el surgimiento del Polo Democrático Alternativo (PDA) representan un paso de gran importancia para la unidad. Pese al escepticismo sesgado de los medios de comunicación del sistema y los cálculos de algunos oponentes, una unidad de acción política ha tomado cuerpo en la izquierda. Era común escuchar la premonición de que las elecciones eran un factor de división. Ahora se ha fraguado una unión en medio de un proceso electoral, con las restricciones que imponen las normas de inspiración en el neoinstitucionalismo patrocinado por el Banco Mundial. Este proceso de unión, que es una respuesta desde el campo democrático al proyecto de Álvaro Uribe para permanecer en el poder con su modelo de neoliberalismo paramilitarizado, es algo inédito, por la significación de las fuerzas que reagrupa; en realidad la izquierda más definida –en sus distintos matices– y los sectores que se han autodefinido como de centroizquierda. A diferencia de otros intentos de reagrupamiento de corrientes intermedias, que excluían conscientemente a la izquierda definida y comprometida con el sentir popular, en esta ocasión tal esquema limitante y oportunista se ha roto. La izquierda a la que tanto critican el diario *El Tiempo* y, en general, los medios del sistema, *es un factor dinámico del nuevo proceso, sin ceder en sus principios ni en su proyecto transformador*.

Pero no se trata sólo de una propuesta electoral. Este avance significa, en el contexto de la lucha contra el proyecto reaccionario adueñado del poder que intenta perpetuarse en él, un primer intento por disputárselo al núcleo lumpenesco de la gran burguesía, el narcoparamilitarismo y el capital transnacional, que representan el imperialismo en el Estado colombiano. Se trata de una lucha por el poder político, no a cualquier costo como en la visión pragmática y posibilista. Se trata del poder popular para transformar la sociedad y para construir un país distinto. La consecuencia con este propósito dependerá del fortalecimiento práctico y de la coherencia política de las fuerzas más avanzadas, organizadas y dinámicas en el seno del proceso.

## EL PARO CÍVICO Y LA INSURRECCIÓN POPULAR<sup>6</sup>

El aprendizaje de las experiencias históricas ha puesto sobre el tapete dos grandes logros de la lucha sociopolítica del pueblo colombiano. De una parte, la unidad como guión de la estrategia para conseguir los cambios en el poder y en la sociedad. De otra, las formas de acción que pueden empujar el cambio político por vías extrainstitucionales, la vía de la democracia directa. Mientras la unidad es un proceso complejo del orden subjetivo, que implica la presencia de sujetos del factor consciente, las expresiones de la democracia directa conjugan expresiones provenientes de situaciones sociales explosivas, donde juegan imaginarios del sentido común popular, mitos sociales inscriptos en los operadores ideológicos de la tradición republicana heroica, prejuicios y temores engendrados por el poder dominante y, también, elementos de conciencia política, provenientes de sujetos del factor consciente.

Las experiencias de la democracia directa no son comunes ni permanentes. En verdad, se trata de rebeliones sociales, bien sea espontáneas, es decir, reactivas; bien resultado de un contexto favorable a la extensión y/o profundización de la protesta reivindicativa; o bien insurrecciones populares reales, con efectos sociales, directos o indirectos, en el corto, mediano y largo alcance desde el punto de vista del poder político<sup>7</sup>.

---

6 A propósito de este punto, deseo agradecer las observaciones y sugerencias de Carlos Walter Porto-Gonçalves, que he tomado como guía para relacionar las extraordinarias experiencias colombianas vinculadas a los movimientos cívicos y a su gran alcance movilizador. Debo señalar, no obstante, que un desarrollo ulterior de esta temática debe ampliar la mirada de los saberes con las experiencias populares de resistencia armada, desde la autodefensa popular de masas hasta el desarrollo de los movimientos guerrilleros revolucionarios que son parte inseparable de la lucha por la emancipación.

7 En relación con los paros cívicos, que presenta como “protesta cívica”, afirma Leopoldo Múnera: “Este tipo de protesta ciudadana recogió formas populares de acción política directa, centradas en reivindicaciones colectivas atinentes a la vivienda, la prestación de los servicios públicos o los problemas sociales, económicos y ecológicos comunes a una localidad o a una región, y puso en cuestión la mediación institucional de los partidos políticos” (1998: 213). Para este autor, “la *izquierda social* encontró así en las organizaciones cívicas el ámbito apropiado para profundizar la crítica a los partidos políticos, mientras nuevos líderes y actores populares se formaban en la desconfianza frente a lo partidista y los discursos teóricos para orientar las prácticas sociales” (1998: 457). En su interpretación, el discurso de la que denomina izquierda social, en proceso de separarse de la influencia política tradicional y de la izquierda política, aunque construye una “legitimidad ganada en el terreno de la acción” (1998: 458), sucumbe ante el peso de las relaciones entre el poder político y militar, de modo que “los protagonistas directos de la violencia política se tomaron de nuevo por la fuerza la palabra y decidieron con las armas y las negociaciones de paz el caótico futuro del país” (1998: 458). Este enfoque, sin embargo, termina reduciendo la riqueza de la experiencia de los movimientos cívicos, ahogados en sangre por la guerra sucia, a la lógica de la unidad entendida sólo como una táctica defensiva. El ángulo histórico que asume Arturo Alape (1980) marca posibles opciones de mayor incidencia política para las luchas cívicas.



La experiencia colombiana es rica en las manifestaciones de estas formas del movimiento social. El caso de los paros cívicos implica un movimiento social hecho de convergencias sobre un problema concreto, que se traduce en un choque con estructuras del Estado o de los intereses privados de terratenientes, capitalistas o multinacionales, que pueden darse tanto en los distintos niveles territoriales como en el nivel nacional. El formato del paro cívico puede incorporar diversos tipos de protesta ciudadana, incluido el paro laboral, las marchas y tomas de carreteras en dirección al centro político urbano, los bloqueos viales, los cabildos abiertos, la formación de juntas cívicas y comités de paro, que asumen la dirección. Los paros cívicos no son sectoriales, sino que implican un territorio y su población. Difieren de la explosión social en que requieren de una preparación concertada, un trabajo dirigido, un esfuerzo consciente. En el paro cívico del 14 de septiembre de 1977, se destacó su dirección obrera, el sentido concreto de sus objetivos reivindicativos y la relación estrecha de trabajadores y pobladores en el desenvolvimiento de las acciones.

Al respecto, describe Arturo Alape (1980):

El Paro Cívico Nacional (de 1977) recoge las ansias de la población urbana, en una extraordinaria acción de masas. Su decisión y su violencia en muchos de los casos fue positiva para su éxito. Su carácter se establece en que el movimiento sindical y las luchas de los barrios se unen en una sola reivindicación general, común, contra la carestía de la vida. No fue un movimiento para derrocar al régimen, ni mucho menos planeaba pasar de la lucha pacífica a una posible insurrección. Sus objetivos estaban más que bien delimitados en los alcances de su programa y en el mismo tiempo de su duración<sup>8</sup>.

Las experiencias colombianas, que como lo indica Múnera (1998: 403 y ss.) han copado períodos significativos entre 1978 y 1988, no han logrado producir cambios más profundos cuando fueron confrontadas por la estrategia contrainsurgente del Estado, en sus distintas variantes. Tres de ellas, las más recientes, comprendieron la reforma del Estado, dirigida a desconcentrar las responsabilidades y a dispersar, en consecuencia, las instancias estatales blanco de la protesta cívica clásica. Una segunda fue la guerra sucia, especialmente bajo su táctica

---

<sup>8</sup> Alape establece una relación de afinidad y de diferencia con otros dos movimientos urbanos que marcaron la historia colombiana del siglo XX: el 9 de abril de 1948, explosión popular de ira y dolor ante el crimen de Jorge Eliécer Gaitán, y el 10 de mayo de 1957, “fecha de la convivencia política del gran capital con sus dos partidos, para crear un nuevo hecho: el Frente Nacional y el derrocamiento de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla” (Alape, 1980: 6-9).

de “desangre lento” pero continuo del adversario, con su terrible consecuencia de desarticulación del tejido de las organizaciones populares y su relación estrecha con el pueblo. En el marco de las negociaciones de paz, esta variante mantuvo su linealidad, con momentos pulsantes de mayor o menor intensidad, y con tránsitos a modalidades de judicialización de la protesta social y de las actividades de la oposición política. La otra estrategia alude a la actual “seguridad democrática”, que intenta conjugar un escalamiento de la militarización de la vida social, una incorporación creciente de la población civil a los propósitos de clase que representa el Estado contrainsurgente bajo un manto “comunitario”, que implica un deterioro de las condiciones de vida de grandes mayorías populares paliado con limosnas al menudeo –deterioro del que se culpa a los guerrilleros, a los sindicalistas que luchan y a los críticos del sistema.

Existe, no obstante, una relación entre paro cívico, movilización cívico-popular e insurrección popular de masas. Dicha relación está en dependencia de las condiciones políticas reinantes, de la reconquista de los espacios y libertades desde la lucha popular. Distintas expresiones análogas se han puesto de manifiesto en América Latina en las acciones sociales masivas contra las políticas de la globalización, las privatizaciones de los recursos naturales y el menoscabo de los derechos de la población. En varios países tales acciones han echado abajo gobernantes caracterizados por su arrogancia y desfachatez para imponer reformas impopulares. La acción directa en estas luchas populares ha alentado expresiones fenomenológicas de democracia directa. En el caso boliviano, el proceso que lleva al gobierno a Evo Morales canalizó, en sus condiciones y a su manera, la fuerza desplegada por la amplia diversidad de formas de la protesta y la extensa cobertura socioinstitucional de sus alcances –paros y movimientos campesinos e indígenas, huelgas de policías, bloqueos de carreteras, etcétera.

En las condiciones que ofrecen las contradicciones sociales, políticas y político-militares que atraviesan la sociedad colombiana no existe espacio para insurrecciones populares espontáneas, a la espera de un proceso ulterior que las canalice hacia un cambio político. La movilización cívica con potencialidad insurreccional de masas debe tener como soporte un proceso unitario fuerte en lo político, decidido a avanzar con todas sus consecuencias, sin temor al cambio en el poder y con disposición a transformaciones institucionales que le abran a la intervención popular el paso a las decisiones.

Nuestra tesis implica que, desde el movimiento popular y su accionar independiente del poder, del régimen político y de sus aparatos ideológicos, pero con el apoyo y la alianza con las fuerzas de vocación transformadora (léase, revolucionaria), será posible generar nuevas

experiencias creadoras de cara al cambio democrático necesario. Sin esta unión indispensable, el movimiento social pierde su dinamismo e iniciativa para derivar hacia las formas de cooptación que ponen en juego ciertas organizaciones no gubernamentales, financiadas por los organismos multilaterales de créditos tipo BID. El reencuentro de las expresiones cívico-populares con los procesos unitarios que promueve la izquierda puede poner en marcha hechos de gran calado para la articulación de nuevas formas de la acumulación de fuerzas. Una condición *sine qua non* es la intervención real, creativa, propia, autónoma de todas esas expresiones cívico-populares, su papel en la construcción del programa de las transformaciones sociales y políticas, en la lucha por el poder político, pero también –y no es lo menos importante– en los cambios en la conciencia social de nuevos contingentes del pueblo.

La batalla de ideas, en acuerdo con la visión que de ella ha formulado Fidel Castro, es un campo de lucha en el que es preciso perfilar una actuación cuidadosamente argumentada, desde el punto de vista racional y desde el punto de vista de los valores. Requiere el desmonte pleno del andamiaje de prejuicios e invenciones que intentan aislar, desprestigiar y condenar los valores que estimulan la inconformidad, la crítica transformadora, la rebelión, el sentido práctico de la organización autónoma de los trabajadores y el pueblo, la conciencia de la necesidad de la unidad y la ruptura con el temor a los cambios necesarios. La batalla de ideas implica aprender a identificar todos aquellos elementos avanzados, emancipadores y revolucionarios que la experiencia popular ha creado, e integrarlos en las nuevas experiencias que construyen los agregados unitarios. La lucha de clases, contrariamente a lo que se afirma, ha contribuido a dar sentido y dirección lógica a las prácticas populares. Tal elemento estructurante no reduce ni simplifica la complejidad natural de las luchas sociales y sus múltiples dimensiones. Pero sí las enmarca en los rumbos que hacen posibles las coincidencias que el problema común pone en evidencia: la raíz de los males de la sociedad en el capitalismo, en sus terribles contradicciones que lo vuelven impotente para resolver las principales calamidades humanas, en su carácter subordinado, neocolonialista, en el marco de una globalización que se pretende a sí misma como totalitaria.

Nuevos cambios en las subjetividades pueden darse. Nuevas fuerzas, nuevas reservas democráticas pueden ser ganadas al movimiento. Las corrientes, en apariencia, más apáticas, más alejadas del quehacer político-instrumental, pueden ser ganadas a la acción independiente y a la unidad transformadora –como por ejemplo los abstencionistas electorales, en el caso colombiano. Sectores de masas análogos a estos se han puesto en movimiento en procesos como el venezolano y boliviano. ¿Cómo ha sido posible eso? Es necesario mirar y reconocer las

experiencias correspondientes, sacar enseñanzas, extraer conclusiones (ver Quijano, 2004; Boron, 2004; 2005). No sobra decirlo: a su manera y en su momento, la Revolución Cubana había atraído esas mismas capas sociales o fracciones no orgánicas del proletariado a una práctica política vinculada a los objetivos primordiales del proceso. Sin menospreciar el aporte y la lucidez que necesariamente brindan los sectores medios, la fortaleza potencial a conquistar es dicho campo social.

### HACIA UNA CONCLUSIÓN

En el recorrido que hemos intentado se han puesto de manifiesto distintos empeños por darle a la emancipación *la forma concreta de la agregación orgánica de fuerzas del movimiento popular* que hemos incorporado como significado a la categoría de *unidad*. No fuimos exhaustivos al respecto y consideramos que es preciso seguir interrogando las experiencias, pasadas y presentes, que son verdaderas escuelas donde se han procesado –y lo siguen haciendo– saberes emancipatorios centrados en la problemática de la unidad popular.

Algunas de estas experiencias han aportado a la formación de subjetividades nuevas, bajo la forma de nuevos movimientos sociales o nuevos procesos de unidad social y política. Algunas de ellas se mueven en los espacios limitados que, en el sistema sociopolítico de la democracia mínima, son el resultado de la lucha popular por la libertad política. Tales espacios, sin embargo, son *auténticas conquistas de la lucha por la democracia* y, por lo tanto, *escenario de confrontación y promesa en perspectiva de posibilidades más amplias y abiertas de la libertad del pueblo*. Otras experiencias se han formado *externamente al sistema sociopolítico* y sobre ellas ha tenido un influjo muy fuerte la existencia de medio siglo del movimiento guerrillero. Ni unas ni otras pueden analizarse como en contraposición. Partimos de la hipótesis de un solo movimiento popular, parcelado, históricamente, por un sistema sociopolítico excluyente y violento.

En este sentido, formulamos la hipótesis de que los sujetos anti-sistémicos en formación han sido, no sólo organizaciones o partidos, sino principalmente agrupamientos, reagrupamientos y convergencias sociopolíticas, que se inscribieron en el complejo de luchas estructurales (de clases) característico de la sociedad colombiana. Las herramientas del paro cívico, de la rebelión y la insurrección popular de masas en amplia escala no son ignoradas. Hacen parte del acervo de experiencias que pueden cumplir un papel en la concreción de nuevos saberes y, sobre todo, en el logro de conquistas de mayor alcance (ver Caycedo, 1999).

La lucha de ideas que envuelve este complejo es la batalla contra los prejuicios, acorazados de violencia inquisitorial desde el poder.

Pero es también lucha frente a prejuicios contradictorios: el mito de la izquierda como peligro, o la izquierda ineficaz, que no sabe gobernar; o el mito de la izquierda intolerante y estalinista, y el de la izquierda incapaz, blandengue, confusa, insegura. Al mismo tiempo, la lucha de ideas sigue poniendo en el orden del día la formación de contrahegemonía y la creación de premisas para una nueva conciencia social con capacidad de pensar la sociedad humanizada, pacificada y socializada.

La visión de empeños de unidad más amplios e incluyentes, en desarrollo de experiencias sistematizadas, con asimilación de las experiencias plurales de América Latina y el mundo nos plantea la exigencia teórica de pensar la unidad de unidades y procesos como un proyecto real, como una “utopía estratégica”. Sólo que tenemos el deber de partir de las condiciones propias, que revelan la existencia de niveles, espacios, experiencias e historias de la lucha sociopolítica, democrática y revolucionaria, diferentes y, a la vez, convergentes en la dinámica de cambio que involucra al país formal y al país real a comienzos del siglo XXI, en un contexto continental que avanza. El tema de la democracia está en el centro del debate y el tema del socialismo despunta como la alternativa de emancipación histórica planteada a nuestros pueblos.

## BIBLIOGRAFÍA

- Alape, Arturo 1980 *Un día de septiembre: testimonios del paro cívico, 1977* (Bogotá: Armadillo).
- Ayala Diago, César Augusto 1996 *Resistencia y oposición al establecimiento del Frente Nacional. Los orígenes de la Alianza Nacional Popular (ANAPO) Colombia 1953-1964* (Bogotá: COLCIENCIAS/CINDEC).
- Boron, Atilio 2004 “La izquierda latinoamericana a comienzos del siglo XXI: nuevas realidades y urgentes desafíos” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 13, enero-abril.
- Boron, Atilio 2005 “Un imperio en llamas” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 18, septiembre-diciembre.
- Caycedo, Jaime 1999 “El sujeto histórico y su complejidad” en Caycedo, Jaime y Estrada, Jairo (comps.) *Marx vive. Siglo y medio del Manifiesto Comunista ¿Superación, vigencia o reactualización?* (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia/Unibiblos).
- López de la Roche, Fabio 1994 *Izquierdas y cultura política. ¿Oposición alternativa?* (Bogotá: CINEP).

- Medina, Medófilo 1980 *Historia del Partido Comunista de Colombia* (Bogotá: CEIS) Tomo I.
- Moore, Barrington 1989 *La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión* (México DF: Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM).
- Múnera, Leopoldo 1998 *Rupturas y continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia 1968-1988* (Bogotá: IEPRI/CEREC/UN).
- Pizarro, Eduardo 1989 “Los orígenes del movimiento armado comunista en Colombia (1949-1966)” en *Análisis Político* (Bogotá) N° 7, mayo-agosto.
- Quijano, Aníbal 2004 “El laberinto de América Latina: ¿Hay otras salidas?” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 13, enero-abril.
- Taussig, Michael 1994 *Un gigante en convulsiones* (Barcelona: Gedisa).
- UNO-Unión Nacional de Oposición 1973 “Programa de la Unión Nacional de Oposición, UNO” en *Documentos Políticos. Revista del Partido Comunista de Colombia* (Bogotá: PCC) N° 107, septiembre-octubre.
- Vásquez, Álvaro 1973 “Con la bandera de la UNO contra los candidatos de la oligarquía” en *Documentos Políticos. Revista del Partido Comunista de Colombia* (Bogotá: PCC) N° 108, noviembre-diciembre.
- Vásquez Carrizosa, Alfredo 1979 *El poder presidencial en Colombia* (Bogotá: Enrique Dobry).